

El pasado 19 de julio, The New York Times publicó la noticia de una fuerte sospecha de que el gobierno de México había utilizado el software “Pegasus”, para espiar y vigilar aparatos electrónicos de periodistas, defensores de derechos humanos. Desde 2011, el gobierno mexicano ha gastado 80 millones de dólares en programas de espionaje con la empresa fabricante NSO Group. Dicha empresa ha declarado que su programa se ha fabricado con la intención de vigilar y detectar acciones terroristas o de seguridad nacional. Sin embargo, ellos no controlan el uso que los gobiernos puedan darle al software.

Dentro de los afectados se encuentran los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, el economista y director del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinás, así como Mario Patrón, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y los abogados Santiago Aguirre y Stephanie Brewer, principales abogados de los padres de familia de los normalistas desaparecidos en Iguala.

El software enviaba mensajes de texto a los teléfonos de los usuarios pidiéndoles que abrieran un enlace, para así poder ver a través de la cámara y escuchar por el micrófono de los aparatos. También se vieron afectados con los mismos mensajes los familiares de las víctimas como son los casos de la esposa de Juan Pardinás y el hijo, menor de edad, de Carmen Aristegui. Cuando un gobierno cae tan bajo como para espiar el teléfono de un menor de edad hijo de una periodista y de defensores de las familias de estudiantes desaparecidos, sólo se refleja la deleznable clase política que tiene el mando.

Desde el 2000, son 106 los periodistas asesinados en México. Del 2000 al 2014 son 18 los desaparecidos y no se tienen cifras exactas de los agredidos o

amenazados. A esta penosa lista hay que agregarle los dos periodistas víctimas de espionaje.

El diario estadounidense señala que México aún está lejos de ser como Turquía, el país que más periodistas encarcela; o como China, un estado autoritario que considera a los periodistas actores de un peligro político. Sin embargo, cuando el gobierno mexicano usa los recursos para vigilar o amenazar a quienes luchan contra su corrupción, señalan su impunidad o reclaman sus violaciones a Derechos Humanos están considerando a dichos periodistas actores de peligro de su nepotismo, intereses políticos y por supuesto, económicos.

En un país con una incertidumbre tan grande de información objetiva, a los consumidores de noticias muchas veces les puede costar trabajo escoger qué periodistas o activistas seguir. Esta situación resuelve esa incertidumbre. Aquellos que señalen actos de corrupción, luchan por causas tan justas o sean tan incómodos como para merecer ser espiados por el gobierno, son aquellos a quienes se debe escuchar. Primero, porque su seguridad depende muchas veces de su vida pública, y segundo, porque son los pocos que dan la información necesaria para saber lo que se debe.